

[La guerra del agua deja 550 millones de inversión sin ningún aprovechamiento](#)

El Júcar-Vinalopó y la desalinizadora de Torrevieja, ya construidos, siguen bloqueados por los enfrentamientos políticos y de regantes

11.12.11 - 01:26 -

J. BATISTA | [ALICANTE](#).

- [Imprimir](#)
- [Enviar](#)
- [Rectificar](#)

[1 voto](#)[2 votos](#)[3 votos](#)[4 votos](#)[5 votos](#)

1 votos

[0 Comentarios](#) |

0

[En Tuenti](#)

[Recomendar](#)

Con la toma de posesión de Rajoy como presidente del Gobierno, se iniciará un nuevo ciclo en relación al agua. Entre los frentes que debe abordar el futuro Ejecutivo está la planificación hidrológica, motivo de enfrentamiento entre comunidades, expertos y regantes.

Como establecía el programa electoral del PP para las pasadas elecciones, se prevé la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que dé cabida a todas las sensibilidades. Trasvases, demandas de territorios deficitarios o la adaptación a la normativa europea son algunas de las muchas cuestiones que estarán encima de la mesa. También habrá que evaluar la manera de encajar el Programa Agua, el plan estrella del Ejecutivo socialista para sustituir al derogado trasvase del Ebro, teniendo en cuenta la enorme inversión de recursos públicos que ha supuesto. Por desgracia, los proyectos emblemáticos del plan, y los más costosos, todavía no pueden ser aprovechados, y eso que las obras están finalizadas. Se trata del Júcar-Vinalopó, cuya inversión ha ascendido a 328.953.850 euros, y la desalinizadora más grande de Europa, la de Torrevieja, que ha consumido 219.400.000 euros del erario público. Son casi 550 millones hipotecados en dos actuaciones bloqueadas, bien por la falta de entendimiento entre regantes, en el primero, o por los conflictos entre Administraciones, en el segundo.

El trasvase, pensado para cubrir el déficit de abastecimiento y las necesidades de los regadíos de la cuenca del Vinalopó, ya está construido. Desde Acuamed, entidad promotora de las obras y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron que ya podría enviar agua hasta el sur de Alicante tras la comprobación del funcionamiento de la infraestructura y después de que las pruebas de resistencia de la balsa de San Diego, en Villena, hayan sido positivas. ¿Por qué no está en servicio, entonces?

La clave se puede encontrar en el manifiesto que poco antes de las elecciones firmaron los regantes alicantinos junto con entidades empresariales y agricultores de la provincia, cuyo objetivo es conseguir que el nuevo Gobierno retome el diseño inicial de la transferencia. En el documento se rechaza la obra actual debido al coste final que tendrá el metro cúbico de agua y por la baja calidad del caudal a enviar. «En cuanto al precio que habrán de pagar los usuarios, estos, a través de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó ya han manifestado su negativa asumir costes superiores a los 0,12-0,15 euros por metro cúbico», según reza el manifiesto. A juicio del lobby de presión alicantino, todos los problemas se derivan del cambio de toma del trasvase impuesto por el Ejecutivo socialista, que en 2006 decidió situar el arranque de la infraestructura en el azud de la Marquesa -en la parte baja del Júcar- en lugar de mantener el anterior, que se ubica en Cortes de Pallás.

Así, el coste del metro cúbico pasa de la cantidad citada a los 0,30 euros, debido a que el gasto energético para bombear el agua hasta Alicante es 2,7 veces más elevado, lo que repercute de forma definitiva en el precio final que deben pagar los regantes. También se hace referencia a la «prometida potabilizadora de la que nada se sabe», es decir, la planta que debe servir para mejorar la calidad del caudal enviado desde el tramo final del Júcar y que llegó a valorarse en 40 millones de euros.

El manifiesto advierte de que el Júcar-Vinalopó corre el riesgo de convertirse en un trasvase sin usuarios, sin regantes dispuestos a pagar el precio final. Si mantienen esta postura, el agua servirá para cubrir demandas de abastecimiento, lo que no solucionará la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, de donde se extrae el agua para regar.

La polémica sobre el trasvase, que en realidad es un proyecto que hereda el programa Agua, tiene su contrapunto en el Júcar, donde los regantes de la Unidad Sindical apoyan la toma actual, la misma que riega cientos de hectáreas de La Ribera.

El caso de la desalinizadora de Torrevieja también es flagrante. La obra está terminada en su parte terrestre, aunque las conducciones de toma y vertido de la planta que se sitúan en el mar ni se han iniciado. Acuamed alega que para ello necesitan una concesión de ocupación por parte de la Dirección General de Puertos de la Generalitat, al estar situadas en el ámbito del puerto de Torrevieja, de titularidad autonómica. El permiso se solicitó en 2009 y aún no se ha tramitado.

Además, para poner la desalinizadora en funcionamiento se necesita la autorización ambiental integrada, de la que no

hay noticias pese a que fue solicitada en agosto de 2007, hace más de cuatro años.

Resto de plantas

El programa Agua prevé la puesta en funcionamiento de otras ocho desalinizadoras en la Comunitat, aunque a día de hoy sólo dos están operativas, y una de ellas (Alicante I) ya estaba prevista con anterioridad y entró en funcionamiento en la época de Aznar.

Además, la utilización de agua desalada para tareas de riego no gusta a los regantes. «Desde el principio pensamos que van en contra del sector más débil, la agricultura», sentencia el presidente de los regantes del Vinalopó, antes de asegurar que sólo la podrán pagar los abastecimientos.